

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9251-2023
CARATULADO : VERGARA/FISCO DE CHILE-CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, nueve de enero de dos mil veinticinco

VISTOS:

En causa digital **Rol C-9251-2023**, por presentación de fecha 01 de junio de 2023, comparecen don Mario Armando Cortez Muñoz y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, abogados, ambos en representación de don **Fernando Sigilfredo Vergara Kimura**, pensionado, todos domiciliados en Arturo Prat 407, departamento 501, Santiago, Región Metropolitana, quienes deducen **demanda de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda**, en contra del **Fisco de Chile**, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, ambos con domicilio en Agustinas N°1225, 4° Piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a objeto que, en razón a los antecedentes de hecho y derecho que esgrimen, se condene al demandado Fisco de Chile a pagar al demandante la suma de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y costas; o en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que el tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

En folio 14, consta que con fecha 08 de agosto de 2023, **se notificó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil**, a don Raúl Letelier Wartenberg, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, de la acción deducida en su contra.

En folio 15, se presenta doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien **contestando la demanda** civil de indemnización de perjuicios deducida en su contra, solicita el rechazo de la acción, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone, oponiendo, en primer lugar, la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante; en segundo lugar, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$300.000.000.-, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. **En subsidio**, de lo anterior, solicita rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



En folio 19, el demandante evacúa el trámite de **réplica**.

En folio 22, la demandada evacúa el trámite de **dúplica**.

En folio 24, se **recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba documental que obra en autos.

En folio 46, **se citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en estos autos, han comparecido don Mario Armando Cortez Muñoz y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, abogados, ambos en representación de don **Fernando Sigilfredo Vergara Kimura**, quienes deducen **demandas de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda**, en contra del **Fisco de Chile**, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, a objeto que, en definitiva, se condene al demandado Fisco de Chile a pagar al demandante la suma de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y costas; o en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que el tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Fundan su libelo consignando, **en cuanto a los fundamentos de hecho**, el relato realizado directamente por don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, quien expone: *“Desde el ingreso al recinto, fui recibido con golpes y enviado al calabozo, que se encontraba en el subterráneo. Estuve en un recinto que se llamaba “La Patilla” era más o menos de 15 por 15 metros el calabozo, en el cual nos encontrábamos muchos detenidos y estaba inundado de agua, en ese lugar permanecí amarrado, con los ojos vendados; privado de alimentos, de agua y de sueño, hacinado y en muy malas condiciones sanitarias. Fui objeto de malos tratos y tortura, sufrí golpizas y aplicación de electricidad, en las partes más sensibles del cuerpo como genitales, tetillas, boca y orejas, sentado en una silla o en la “parrilla” donde las descargas de corriente eran en todo el cuerpo, sufrí colgamientos, aplicación del “pau de arara”, me mantuvieron incomunicado. Fui sometido al “plantón”, siempre con los ojos vendados y amarrado todo el tiempo, me aplicaron el teléfono y el submarino, fui amenazado de muerte, y se me hizo un simulacro de fusilamiento.*

De este lugar fui trasladado al Estadio Chile, fui recibido por militares, los que me dieron golpes de puño y pie al llegar, primero estuve en la cancha, luego con la llegada de más presos políticos, me subieron a las graderías. Fui incomunicado por un tiempo y sometido a un riguroso régimen disciplinario, las luces del lugar estaban siempre encendidas y a veces me daban comida en diferentes horarios, nunca supe que día era, si era de día o de noche, estaba totalmente perdido en el tiempo. Los interrogatorios a los cuales fui sometido los realizaban efectivos del Servicio de Inteligencia Militar, nunca me sacaron del estadio para los interrogatorios, si a muchos de mis compañeros se los llevaban a otras partes fuera del estadio con destino desconocido, de muchos nunca más supe, ahora sé, debido a que figuran en las listas de los desaparecidos o ejecutados políticos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPXNXSXXMHD

En los interrogatorios me daban muchos golpes, amenazas de muerte, también en este lugar me hicieron simulacro de fusilamiento y me colgaron, pero lo más violento fue presenciar ejecuciones de presos en el estadio.

Después de ocho meses en el estadio Chile, salí en libertad."

Indican que el demandante fue reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el propio Estado chileno, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por las Comisiones Nacionales sobre Prisión Política y Tortura; relatan extensamente el panorama político social acontecido luego de la declaración de estado de guerra interna que se encuentra consignado en el Informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y concluyen que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas.

Sostienen que la vida de don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura fue violentamente interrumpida, de tal forma que cambió para siempre, interrupción que se caracteriza por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima, en un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico militar chilena, siendo lo más grave que dicho cambio evidentemente no fue voluntario, ya que se debe a la interrupción que hace el Estado de Chile en su vida a través de los agentes que financio para tal efecto, estándose en el presente caso frente a crímenes de lesa humanidad, y quedando de manifiesto que el actuar de los agentes del Estado de Chile transgredió los límites, irrespetando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Agregan que un Estado que se diga Democrático debe, por ser tal, indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a los vejámenes físicos y morales que, con ocasión de detenciones ilegales, torturas, prisión política, persecución y ejecuciones hayan provocado sus agentes, ya que denegar la reparación del daño moral que subsistirá en las víctimas y sus familiares, es obligarlos a seguir soportando el injusto permanentemente, enfatizando en que en consideración de los hechos descritos, es que interponen la presente demanda de indemnización de perjuicios, con la finalidad de que se indemnice a su representado por los graves daños que ha sufrido y producto de los diversos abusos de los que fue víctima, que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo, vergüenza, humillación y "amargura".

Se remiten luego a los fundamentos de **derecho**, explayándose, en primer lugar, respecto a la **responsabilidad del Estado**, indicando que ésta emana de los perjuicios que provocan y causan los órganos de la administración, lo que está reconocido en la Constitución Política del Estado de 1980 y en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, siendo tanto el reconocimiento y la aplicación efectiva de un principio general de responsabilidad patrimonial del Estado lo que constituye una de las piezas maestras dentro del sistema de relaciones jurídicas existentes entre la Administración y los ciudadanos, existiendo un relativo consenso entre los civilistas en que la función primordial de la responsabilidad patrimonial es y debe ser, en los distintos ordenamientos, la reparatoria o compensatoria: la



responsabilidad es en ese sentido la reparación de daños producidos a las víctimas, siendo esa la función básica de la responsabilidad. La reparación de los daños pareciera ser la razón de esa institución, de modo que un sistema de *responsabilidad* que no repara los daños a las víctimas, seguramente no es responsabilidad, cuestión que queda lo suficientemente diáfana desde el momento que se exige siempre la comisión de un daño, y que ese daño, por regla general, sea compensado, en todo o en parte, en dinero. La función compensatoria supone la intervención del derecho una vez que se ha producido el hecho que produce el daño, por lo cual renuncia a cualquier consideración de intervención previa que pudiera minimizar la ocurrencia de actos dañosos. Se refieren a lo prescrito en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política del Estado y artículos 1, 2 y 3 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, sosteniendo que dicha normativa establece en el país una responsabilidad directa del Estado, por el daño que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de sus funciones, y sea que el daño se produzca en un funcionamiento normal o anormal, regular o no, jurídico o, de hecho, de la administración, pues el legislador no distingue y consecuente con ello, responsabilidad directa del Estado o Teoría del Órgano, existe la norma del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que confirma a nivel normativo dicha responsabilidad.

Continúan haciendo presente que la **responsabilidad del Estado es de derecho público**, señalando que el fundamento básico de la responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango supraconstitucional, constitucional y legal, todas normas del ámbito del derecho público. Citan jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y doctrina al efecto, y agregan que la responsabilidad de la Administración Pública surge en razón de los daños que ella causa en las actividades que desarrolla y que recaen en los administrados, daños que no tienen por qué ser soportados por el patrimonio de éstos, es decir, es posible que la responsabilidad surja por actuaciones lícitas, como por actuaciones ilícitas de la Administración Pública y ello se debe a que la Constitución en su artículo 38 inciso segundo, no ha considerado a los elementos de ilicitud y culpa para constituir la institución de la responsabilidad pública y se apoya en su nuevo criterio, que es el de la lesión; luego, refieren entender que la responsabilidad de la Administración Pública establecida en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, deriva de toda lesión producida a los particulares, entendida como perjuicio antijurídico, que éstos no tienen el deber de soportar por no existir causas de justificación del daño, sea que ellas provengan de hechos o actos administrativos lícitos o ilícitos. Luego, se remiten a algunas de las características de la responsabilidad del Estado mencionando al efecto doctrina del autor don Eduardo Soto Kloss, y también se refieren a jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en ese sentido, sosteniendo que el vínculo entre ese derecho imperativo o derecho obligatorio con los crímenes de lesa humanidad fue constatado simultáneamente a través de la jurisprudencia internacional.

Concluyen indicando que, en el caso de marras, se está frente a un ilícito que constituye un delito de lesa humanidad, por lo cual el Estado de Chile no



puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo la normativa humanitaria internacional de naturaleza *ius cogens*.

Enseguida, se explayan sobre la **imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida**, e indican que según los hechos que acontecieron y que son descritos por la víctima, la legislación, doctrina y jurisprudencia expuestas en el libelo, intentar aplicar el derecho común a ese tipo de casos resultaría un incumplimiento grave por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y a su condición de Estado perteneciente a la comunidad internacional, así como a los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, amparados por los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia que obligan a la Nación a reconocer y proteger ese derecho a la reparación integral, con arreglo a lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Carta Política. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuyen que la responsabilidad del Estado por esa clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros aspectos de derecho interno, pues si se comete un hecho punible imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la inobservancia de un canon internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio. En relación a lo anterior, se refieren a diversos fallos judiciales cuyos considerandos atingentes reproducen al efecto.

Complementan lo antes dicho concluyendo a la vez que, según los acápites expuestos en el cuerpo del libelo, la normativa aplicable a la especie, tales como Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Ginebra de 1949, Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, Reglamento de la Haya de 1907, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, Resolución N°60/147 de fecha 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Política de la República y Ley 20.357, entre otras, es de derecho público, constituyendo normativa internacional humanitaria de carácter *ius cogens*. En consecuencia, el Estado de Chile no puede pretender eludir su responsabilidad en el presente caso, dado que, atendido principalmente el artículo 5 de la Constitución Política de la República, un límite a la soberanía y por tanto al derecho interno lo constituye justamente los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tornándose inadecuada la aplicación del Código Civil chileno en cuanto a acoger las disposiciones que hacen viable la aplicación de prescripción y, código que por cierto entro en vigencia en 1857, por lo que sin duda es insuficiente para resolver casos de violencia internacionales, y vulneraciones masivas y sistemáticas a derechos esenciales



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPXNXSXXMHD

de un sector de habitantes del Estado. Se remiten y reproducen lo pertinente de lo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos producto de la aplicación de prescripción por parte de algunos tribunales de justicia en el caso María Laura Órdenes Guerra y otros respecto de la República de Chile, sometidos a su jurisdicción, sintetizando que, el Estado de Chile, producto de que algunos de sus tribunales de justicia, al acoger la excepción de prescripción promovida por el Consejo de Defensa del Estado de Chile, resulto ser culpable de ilícitos de carácter internacional, así también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza las respectivas recomendaciones al Estado de Chile, a las cuales el Estado chileno dio respuestas, todas en favor de no acoger la prescripción y asegurar la no repetición en el sentido de volver a acoger la prescripción en ese tipo de causas.

Finalizando y respecto del **daño moral proveniente de vulneración a los derechos fundamentales**, refieren que la mayoría de la jurisprudencia considera que el daño moral consiste, equivale, y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño.

Afirman que don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura fue víctima de: Detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos, tratos inhumanos y degradantes. Fue víctima de violaciones a sus Derechos Humanos, de persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes, todo lo cual le generó un gran daño, y las vejaciones de las que fue víctima han hecho que hasta la actualidad siga sufriendo y siendo atormentado por lo experimentado a manos de agentes de la dictadura militar chilena.

SEGUNDO.- Que, la demandada, **contestando la demanda civil de indemnización de perjuicios** deducida en autos, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone. Señala que comparece en autos don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, chileno, pensionado, casado, quien señala haber sido víctima de detención ilegal, prisión política y torturas, Registro Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, Ley N°20.405 publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2008 y Decreto Supremo N°43 publicado el 5 de febrero de 2010, Comisión Valech I número 26.125 del listado, solicitando una indemnización de \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y costas; o en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero que el tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas, como consecuencia de la detención ilegal, prisión política y torturas que habría sufrido por detención por ocho meses en el estadio Chile, sin indicar fechas de detención y la fecha en que recuperó su libertad, invocándose como antecedentes normativos de su



acción los artículos 1°, 6°, 7°, 19 N°s 20 y 24, y 38 de la Constitución Política; artículos 1.1, 2, 5.2 y 63.1 y siguientes de la Convención Americana de Derechos Humanos; Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

En primer lugar, opone **la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada, por haber sido ya indemnizado el demandante**, refiriendo en cuanto al marco general sobre las reparaciones ya otorgadas, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente esas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Señala que, en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esa perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Indica, que, por otro lado, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Ese concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Esos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Refiriéndose luego a **la complejidad reparatoria**, cita doctrina de la autora Elizabeth Lira, y respecto de los objetivos de la justicia transicional, éstos fueron: *“(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”*, añadiendo que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de *“propuestas de reparación”* entre las cuales se encontraba una *“pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas”* y algunas prestaciones de salud, y dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.



Hace presente que, asumida la idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas (como la Ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esa compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha afrontado ese complejo proceso de justicia transicional. Complementa indicando que, en ese sentido, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas; las que buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Analiza luego, cada una de esas compensaciones y lo que éstas han cubierto, resaltando en cuanto a las reparaciones específicas que en lo tocante al caso de marras, el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N°19.234 y 19.992 y sus modificaciones, indicando que al efecto, la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Informa que, adicionalmente, el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-

Refiriéndose a lo que denomina como **la identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas**, señala que, tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esa forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Reproduce jurisprudencia en ese sentido y menciona que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas, y en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Concluye que, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, resultan razones por la que opone la excepción comentada.

Luego, **en subsidio**, opone **la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios**, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes, argumentando que conforme al relato efectuado por el demandante, la detención ilegal y tortura que sufrió **ocurrió por la detención sufrida por ocho meses en el estadio Chile, sin indicar fechas de detención y la fecha en que fue puesto en libertad**, y siendo del caso,



que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el día **08 de agosto de 2023**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Se extiende **sobre generalidades y fundamento de la prescripción**, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en el caso no existe, y pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras, repasando que la prescripción es una institución universal y de orden público, siendo efectivo que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre esas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2°, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales. Menciona que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1°, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial a través de un incremento patrimonial del afectado.

Enseguida, refiriéndose a **los fundamentos de la prescripción** indica que ésta tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Sostiene que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Comenta y analiza jurisprudencia sobre la materia, en particular **la sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013**,



sobre unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos, y agrega que las sentencias anteriores y posteriores a dicho fallo, no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia.

Indica respecto **al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria** que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de ésta, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las mismas.

Argumentando acerca de **las normas contenidas en el Derecho Internacional**, indica que en cuanto a que el demandante formula alegaciones en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esa materia, entre éstos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución N°2391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970; Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, que se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto el Máximo Tribunal; La Resolución N°3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*", que se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias; La Convención Americana de Derechos Humanos, que no



establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria, destacando que al efectuar la ratificación, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Sigue citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N°1133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007 y causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N°4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, cuyos considerandos atinentes transcribe al efecto.

En síntesis sostiene que, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver la contienda de autos y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que deberá rechazar la demanda indemnizatoria por encontrarse prescrita la acción deducida.

En cuanto **al daño e indemnización reclamada**, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$300.000.000.-; sobre la fijación de la indemnización por daño moral, hace presente que éste dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo, y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencias esas capacidades. Agrega que las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en esa materia han actuado con mucha prudencia.

Prosigue indicando, **en subsidio de las alegaciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos**



establecidos por los tribunales, que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que esos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, y de no accederse a esa petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esa materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Alega **la improcedencia del pago de reajustes e intereses**, haciendo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, pues a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse, lo que implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esa perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, refiere que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Cita jurisprudencia al efecto y finaliza indicando que en el hipotético caso que el tribunal decida acoger la acción de autos y condenar al demandado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

TERCERO.- Que, evacuando el trámite de **réplica**, el demandante ratifica los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

En relación a **la excepción de reparación integral y la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante**, refiere que la normativa a la que hace referencia la defensa fiscal es asumida voluntariamente por el Estado y no significa en ningún caso la renuncia de la víctima a ejercer la acción judicial. Asimismo, dicha normativa no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que el actor persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, ya que se



trata de formas distintas de reparación y que, reitera, las asume el Estado voluntariamente.

En relación a **la excepción de prescripción extintiva**, menciona que la acción que se interpone contra el Fisco busca obtener la reparación de los perjuicios que fueron ocasionados por agentes del Estado chileno, como se desprende de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, lo que resulta totalmente coherente y procedente conforme se desprende de La Constitución Política de la República de Chile, en concordancia con los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los artículos 5° y 6° de La Constitución Política de la República de Chile, lo que obliga al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación integral. Cita sentencias al efecto, y agrega que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

En relación **al monto de la indemnización y los reajustes e intereses**, señala que el monto solicitado es de plena justicia, toda vez que el demandante fue víctima de violación a los Derechos Humanos, siendo sometido a tortura, persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes, todo lo cual le generó un gran daño en su vida emocional y personal.

CUARTO.- Que, evacuando el trámite de **dúplica**, el Fisco de Chile ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, reiterando el rechazo de la acción. En relación a **la excepción de reparación satisfactiva**, reitera que el daño moral ya ha sido indemnizado, e insiste en cuanto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación con **la excepción de prescripción** opuesta, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”, fallo en el que se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba, el demandante ha aparejado al primer otrosí de su libelo, y por presentación de folio 25, **prueba documental** consistente en:

1.- Copia autorizada de escritura pública, de fecha 13 de marzo de 2023, otorgada ante Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, Repertorio N°2879-2023, donde consta mandato judicial conferido a



don Mario Cortez Muñoz y don Alex Sepúlveda Rodas, para actuar en representación del demandante.

2.- Imagen digitalizada de documento denominado Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, Capítulo II. “Marco Conceptual”, Título II. “Acerca de la Población Afectada”.

3.- Imagen digitalizada de presentación denominada “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH”, realizada por el Psicólogo don Freddy Silva G., en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS Servicio de Salud Aconcagua, de fecha 16 de octubre de 2017.

4.- Imagen digitalizada de documento denominado “Informe en Términos Generales Sobre las Secuelas dejadas en el Plano de la Salud Mental relacionadas con las Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Dictadura Militar. Caso: D. Hernán Díaz Jiménez”, elaborado por PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Norte, y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

5.- Imagen digitalizada de documento denominado “Represión política, daño transgeneracional y el rol del estado como agente reparador”, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS del Servicio de Salud Araucanía Norte, don Sergio Beltran P.

6.- Imagen digitalizada de documento denominado “Algunos Problemas de Salud Mental Detectados por Equipo Psicológico-Psiquiátrico”, con timbre del Centro de Documentación, Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad.

7.- Imagen digitalizada de documento denominado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, con timbre de Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad.

8.- Imagen digitalizada de documento denominado “Trabajo Social, Una Experiencia Solidaria en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, realizado por doña Victoria Baeza Fernández, doña Norma Muñoz Peñailillo, doña María Luisa Sepúlveda Edwards, doña Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Santiago, Abril de 1987.

9.- Imagen digitalizada de documento denominado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos”, realizado por el Equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad, integrado por los doctores don Andrés Donoso, don Guillermo Hernández, don Ramiro Olivares, el psicólogo don Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería doña Janet Ulloa, Junio 1989.

10.- Imagen digitalizada de documento denominado “Efectos con la Salud Física y Mental en la Población a Consecuencia de la Represión en las Protestas y Otras Acciones Masivas”, con timbre del Centro de Documentación, Vicaría de la Solidaridad.

11.- Imagen digitalizada de documento denominado “Consecuencias Psicosociales de la Represión Política”, realizado por la psicóloga doña Elizabeth Lira.

12.- Imagen digitalizada de Capítulo III-Contexto, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPXNXSXXMHD

13.- Imagen digitalizada de Capítulo V-Métodos de tortura: definiciones y testimonios, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

14.- Imagen digitalizada de Capítulo VIII-Consecuencias de la prisión política y la tortura, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

15.- Imágenes digitalizadas de documentos denominados “La Tortura Modelo de Intervención”, año 2005 y “La Tortura Un Problema Médico”, marzo 1983, ambos emitidos y realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

16.- Imagen digitalizada de documento denominado “Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

17.- Imagen digitalizada de sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, “Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile”.

18.- Imagen digitalizada de extracto de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas de Prisión Política y Tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en la cual el demandante se encuentra en el número 26.125.

SEXTO.- Que, por su parte la demandada ha aparejado al proceso al segundo otrosí de su presentación de folio 15, y por presentaciones de folios 22 y 37, **documental** consistente en:

1.- Resolución TRA N°45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, sobre nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

2.- Resolución TRA N°45/4/2023, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, sobre nombramiento de don Marcelo Eduardo Chandía Peña, en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

3.- Oficio ORD.: DSGT N°4792-18091, de fecha 01 de diciembre de 2023, emanado del Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, que informa beneficios de reparación Leyes N°19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, recibidos por don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura.

SÉPTIMO.- Que, del mérito de autos, documentos singularizados en el motivo Quinto del presente fallo y dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen *de facto* que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas en el país, se encuentra acreditado que “efectivamente don **Fernando Sigilfredo Vergara Kimura**, reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, estuvo privado de libertad en fecha no precisada, en un recinto denominado “La Patilla” junto a otros detenidos, permaneciendo amarrado, con los ojos vendados, privado de alimentos, de agua, de sueño, hacinado y en deficientes condiciones sanitarias, siendo golpeado, amenazado



de muerte, torturado mediante aplicación de electricidad en partes sensibles de su cuerpo como genitales, tetillas, boca y orejas, y también mediante los métodos conocidos como “el teléfono” y “el submarino”, sufriendo colgamientos y simulacro de fusilamiento. Posteriormente, fue trasladado al estadio Chile, donde fue recibido por militares y sometido a interrogatorios realizados por el servicio de inteligencia militar, recibiendo golpes, amenazas de muerte, simulacro de fusilamientos y obligado a presenciar ejecuciones de presos en el estadio. Después de ocho meses de detención en el estadio Chile, recuperó su libertad.”

OCTAVO.- Que, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en el párrafo precedente, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce el demandante en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos por don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, por su forzada e injustificada detención, torturas, tormentos, vejámenes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos.

NOVENO.- Que, el señalado informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como a su turno la Ley N°19.123, en cuanto crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estableciendo que como servicio descentralizado le corresponderá promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18, remitiéndose luego al artículo 17, norma que se remite a la individualización de las personas que se realiza en el volumen segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se desprende con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, según da cuenta la imagen digitalizada de extracto de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas de Prisión Política y Tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en cuyo registro número 26.125 se encuentra el actor.

DÉCIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos el actor ha accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en la detención ilegal, torturas, tormentos, vejámenes y tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por el demandante.

UNDÉCIMO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida de contrario, el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido reparado integralmente el demandante, fundado en que éste ya ha sido indemnizado en conformidad a la Ley N°19.123, en los términos analizados en el motivo Segundo del presente fallo.

DUODÉCIMO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley N°19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones,



siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico.

Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto al demandante, en su calidad de víctima directa de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de haber sido beneficiario de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley N°19.123, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sea resarcido del evidente daño moral que en diversas dimensiones ha padecido y encontrándose acreditado en autos la perpetración de los delitos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en la persona del actor, así como la participación en los mismos de agentes determinados del Estado, dependientes del Ejército de Chile, existe con claridad como consecuencia de los mismos el daño moral comentado, el cual como se dijo, no sólo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley N°19.123, sino que también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO TERCERO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido en subsidio la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2497, en los términos latamente expuestos en el motivo Segundo de esta sentencia, sosteniendo que desde la fecha en que se produjo la detención ilegal y tortura, **sufrida por ocho meses en el estadio Chile**, y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de Marzo de 1990, a la fecha de notificación de la demanda, 08 de agosto de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 2332 del Código Civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2515, en relación al artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2515.

DÉCIMO CUARTO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos por el actor lo sitúa en la responsabilidad del Estado



por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, y estableciendo como autores del mismo a personal integrante del Ejército de Chile, en servicio al momento de los hechos, y que como se señalare en los motivos precedentes, estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce el demandante en contra del Fisco de Chile, caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura.

En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de quien fue afectado por delitos de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO QUINTO.- Que, sentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aún si tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de delitos de torturas, vejámenes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

Que, de este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos que se han establecido, no controvertidos por la demandada, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

DÉCIMO SEXTO.- Que, en efecto, en la clase de delitos por los cuales se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, y en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N°19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los



derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno, en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3° de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4°. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que éstas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

DÉCIMO OCTAVO.- Que, en consecuencia, sólo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

DÉCIMO NOVENO.- Que, encontrándose establecida la comisión de hechos ilícitos por agentes del Estado, surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que *“El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado”*. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal.



Al efecto, de las normas citadas en los párrafos precedentes, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador ha expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando éste ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGÉSIMO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por el actor, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto, es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral es, en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones afectaron a la víctima, en este caso el actor don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto, causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño que sufrió el demandante, en su calidad de víctima directa de violaciones a los Derechos Humanos y **que fuera reconocido como tal en el registro número 26.125** de la Nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, quien no obstante omitir en su relato las fechas precisas de los acontecimientos vividos, fue detenido en un recinto denominado “La Patilla”, donde permaneció amarrado, con los ojos vendados, privado de alimentos y líquidos, hacinado y en precarias condiciones sanitarias, siendo objeto de golpes, amenazas de muerte, torturas consistentes en aplicación de electricidad en partes sensibles de su cuerpo, también las técnicas denominadas “el teléfono” y “el submarino”, sufriendo colgamientos y simulacro



de fusilamiento. Posteriormente, fue trasladado al estadio Chile, donde fue recibido por militares y sometido a interrogatorios por efectivos del servicio de inteligencia militar, quienes lo golpeaban, amenazaban de muerte, y también fue objeto de simulacro de fusilamiento, siendo obligado a presenciar ejecuciones de presos en el estadio. Finalmente, después de ocho meses de detención ilegal en el estadio Chile, recuperó su libertad.

De los antecedentes expuestos, es dable desprender con claridad que tales padecimientos y calvarios le produjeron un gran dolor, angustia, aflicción, inseguridad y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se ha prolongado a lo largo de su vida, más aun considerando las circunstancias particulares padecidas por el actor, quien como se dijo fue detenido y privado de libertad por ocho meses, en lugares no aptos para ello, torturado en múltiples oportunidades, manteniéndose en total incertidumbre sobre su destino, circunstancias que en los informes emitidos acerca de las secuelas de las víctimas y de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, revelan los daños experimentados a lo largo de los años por el actor a consecuencia de los ilícitos que motivan la presente causa.

Cabe destacar que, por la naturaleza de los ilícitos que afectaron al demandante, las circunstancias de los mismos, los acontecimientos sociales históricos de nuestro país que han permitido en algunas casos, más de cuarenta años después, conocer algunas circunstancias de las desapariciones y la ubicación de los restos mortales de algunas de las víctimas, permiten desprender en forma inequívoca la angustia permanente seguida de las referidas experiencias traumáticas, constante que en mayor o menor medida, le ha acompañado durante el devenir de su vida.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, a fin de determinar el monto indemnizatorio, cabe tener presente que el análisis de la prueba documental rendida en autos permite desprender la existencia del daño extrapatrimonial cuyo resarcimiento pide el actor, siendo un hecho público y notorio que la tortura es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, que trasciende no solamente al ámbito individual, sino que alcanza a todas las esferas vitales de quien la sufre, por lo que reiterando la calidad de víctima directa de violaciones a los Derechos Humanos que fuera reconocida a don Fernando Sigilfredo Vergara Kimura, se accederá a la demanda de indemnización del daño moral experimentado, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso, y teniendo especialmente presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, se reduce prudencialmente a la suma única y total de **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)**.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, debiendo pagar la demandada la suma de dinero ordenada en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, IPC, entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que la sentencia revista el carácter de ejecutoriada, según liquidación que se practicará en su oportunidad por el señor Secretario Subrogante del tribunal.



Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, y siguientes del Código Civil; 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N°3, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley N°19.123; artículo 5° y 6° de la Constitución Política de la República, **se declara:**

I.- Que, se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, de improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante y de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios, en ambas excepciones opuestas, de acuerdo a lo consignado en los motivos Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, respectivamente, del presente fallo.

II.- Que, **se acoge parcialmente** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta con fecha 01 de junio de 2023, a folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar al actor don **Fernando Sigilfredo Vergara Kimura**, la suma única y total de **\$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)**, por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo Vigésimo Cuarto.

III.- Que, no se condena en costas a la parte demandada, por no haber resultado totalmente vencida, y tener motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de enero de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XPXNXSXXMHD